

La memoria del *Proceso* argentino y los problemas de la democracia: La memoria, el historiador y el ciudadano. *

Luis Alberto Romero

El derrumbamiento de la última dictadura argentina, que gobernó entre 1976 y 1983, fue rápido. Comenzó en junio de 1982, cuando se produjo la derrota de la Guerra de Malvinas, y culminó en octubre del año siguiente, cuando se realizaron las elecciones que restablecieron la democracia. Paralelamente con ese derrumbe se construyó, aceleradamente, una imagen de la dictadura, que cristalizó en un informe oficial sobre sus crímenes –conocido como Nunca Más– y culminó poco después, en 1985, con la condena de los principales responsables militares, junto con algunos de los jefes de las organizaciones guerrilleras..

Esa memoria de la dictadura, la del Nunca Más, fue el más sólido fundamento de la democracia republicana que se construyó desde entonces. En ese sentido, constituyó una memoria fundadora, una versión “oficial” de la historia. A lo largo de los veinte años siguientes aparecieron algunas variantes de esa memoria fundadora. Emergió una memoria *militante*, que reivindicó las luchas previas a la dictadura y a los combatientes, hasta entonces presentados simplemente como “víctimas inocentes”. También emergió una memoria que llamaría *rencorosa*, preocupada por ajustar cuentas con el pasado, a costa del pluralismo construido desde 1983. Finalmente, ha cobrado estatuto público, entre quienes justifican la dictadura, o al menos no la condenan, una memoria centrada en la reivindicación de las propias víctimas de la violencia guerrillera.

Hoy hay en la Argentina una fuerte disputa por la memoria, mucho más intensa que la habida en 1983. El conflicto está relacionado con distintas y novedosas opciones políticas que se abren para una Argentina que se recompone de una profunda crisis, económica, política y social, desencadenada en diciembre de 2001. Hoy, como en 1983, se trata de ajustar cuentas con el “pasado que duele”. Pero a diferencia de aquella ocasión, hoy está bajo examen no solo la dictadura militar sino la totalidad del ciclo reciente de violencia, que podría decirse cubre en la Argentina la segunda mitad del siglo XX.

Mi propósito es examinar lo que todavía es la versión principal del pasado –la del Nunca más–, y con ello mostrar qué papel cumplió esa versión en la construcción de la nueva democracia, republicana y liberal, sosteniéndola y a la vez condicionándola. En suma, ver el uso político de lo que en su momento fue una nueva memoria oficial, así como las consecuencias de ese uso. A la vez, quiero plantear la cuestión de los historiadores, y más en general la de los científicos sociales, y su compleja, por no decir ambigua, relación con esa memoria de la Dictadura y de la democracia; pues los historiadores y científicos sociales están entre quienes suministran insumos para esas construcciones memorísticas, pero a

* Por aparecer en Lucha Armada

la vez son quienes pueden ejercer la crítica, y con ese ejercicio, consagrar o poner en entredicho esas construcciones memorísticas colectivas.

Memoria y saber históricos

Quiero comenzar con unas precisiones familiares: la distinción entre la memoria del pasado y el saber histórico. La memoria es la parte central de la conciencia que un actor -individuo, grupo, sociedad entera- tiene de su pasado. Se relaciona directamente con su identidad, o mejor, con sus subjetividades: la pregunta acerca de de dónde venimos y a dónde queremos ir configura eso que, desde cada subjetividad, llamamos el presente.

La memoria es una actividad libre. Está hecha de recuerdos, olvidos, distorsiones, refracciones, tergiversaciones, subrayados, esfumados y mil operaciones más. En ninguna de estas operaciones la "verdad", en el sentido convencional del término, tiene un sentido especial. Cada uno se acuerda de lo que quiere y se olvida de lo que le da la gana, sin otro criterio que la utilidad, o algún tipo de utilidad: vivir mejor, si se piensa en términos individuales; construir un futuro fabricando un pasado, si se lo piensa en términos de algún tipo de militancia; establecer o consolidar el orden existente, si se lo mira desde el estado. La memoria no pretende ser neutral; es valorativa y categórica, y tiende a considerar las cosas en términos de blancos y negros. Finalmente, la construcción de la memoria es un proceso social, con partes en conflicto, con victorias y derrotas, imposiciones y concesiones, hegemonías, tradiciones, disidencias y emergencias.

Todo lo que en la memoria es exaltado y contrastado, en el campo del saber de los historiadores es opaco y matizado. Los historiadores somos una modesta corporación profesional cuya actividad se orienta a tratar de establecer la verdad, pero sabiendo que, estrictamente, la verdad no existe, que se trata de conclusiones provisionales, que no son categóricas, y que en ellas, en lugar de certezas, hay un acuerdo convencional entre los practicantes de la historia, acerca de los límites de lo opinable. Sobre todo, desde el saber histórico no se aspira a juzgar sino a comprender, según el célebre *dictum* de Marc Bloch, admitiendo que los valores son relativos al tiempo y al espacio, y que en los conflictos cada una de las partes tiene sus razones y sus verdades.

El modo como se construye la memoria es un objeto de estudio para los historiadores. Un objeto frío, si se trata, por ejemplo, de la memoria sobre el pasado romano construida durante el imperio. La temperatura aumenta si el tema es la memoria de la nación y sus mitos de origen. El punto máximo se alcanza cuando se trata de la memoria del pasado reciente, o más bien, de aquella parte del pasado reciente "que duele".

El historiador como persona tiene dos almas, que coexisten, en armonía o conflicto: es a la vez ciudadano e historiador. A veces actúa como uno, otras como otro, y en otras trata de encontrar un equilibrio, un balance. En los estudios del "pasado que

duele" fácilmente se advierte esta doble condición: actor comprometido y analista; ciudadano que defiende valores, y practicante de un saber que los relativiza.

El historiador puede proponerse intervenir en la construcción de la memoria, del mismo modo que interviene el político, el periodista, el poeta o el educador: moldearla utilizando como herramienta el prestigio tradicionalmente acordado a la práctica del historiador, pero sin renunciar a sus convicciones de historiador.

¿Cómo son recibidas, en los combates por la memoria, esas preocupaciones por el matiz y la comprensión? Generalmente mal: en las cuestiones conflictivas, que dividen la opinión, quien trata de comprender suele ser acusado de justificar, o de poner en cuestión verdades que son centrales para las creencias, como ocurre con la habitual referencia a los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura argentina. Sostener, por ejemplo, que fueron 22.000 puede ser considerado un cuestionamiento de los valores de los derechos humanos y una apología de la dictadura.

Así, el historiador que quiere compatibilizar su papel de ciudadano con el de historiador, cuando explica los procesos de construcción de la memoria del pasado que duele, tiene que enfrentar una tensión entre por una parte la tendencia, como ciudadano, a la afirmación de la verdad valiosa, y por otra la corrosión de esa verdad mediante el examen crítico del historiador.

Pero hay una segunda tensión –y aquí llego al punto que quiero plantear- que tiene que ver con la eficacia. Aquel historiador que quiere colocar su oficio al servicio de una causa ciudadana deberá decidir si lo más eficaz es una versión moral, simple y contundente, donde esté claro quiénes son los amigos y quienes los enemigos, o por el contrario una versión crítica, compleja y matizada. En este caso las lecciones serán menos evidentes, pero la comprensión de la realidad, de las circunstancias que condicionan la acción, será más clara, de modo que, a la larga, su mensaje será más eficaz. Este es el dilema que me parece que afrontan hoy en la Argentina los historiadores comprometidos con la construcción de la democracia republicana, pero que son más amigos de la verdad que de Platón.

Memoria del proceso y construcción del imaginario democrático

Examinemos ahora la construcción de la versión dominante de la memoria de la última Dictadura, comúnmente conocida como "el Proceso". La imagen generalmente aceptada apareció casi de improviso, y fue absolutamente contemporánea de la nueva imagen de la Democracia, que sustituiría la dictadura. Más aún, puede decirse que una alimentó a la otra, y que fueron dos versiones simétricas de lo mismo.

Desde junio de 1982, la opinión pública achacó a los militares la derrota en la guerra de Malvinas y, sin distinguir demasiado, también les reprochó el haber ido a la guerra, un hecho que apenas dos meses antes había sido ampliamente celebrado. Simultáneamente se producía la acelerada descomposición interna del régimen, el aflojamiento de los mecanismos de censura, y la pública exposición de

los aspectos más espectaculares de la represión de los últimos años: historias de desaparecidos, narraciones de sesiones de tortura, exhibición de los lugares de enterramiento, en fin, todo lo que se llamó “el show del horror”, coincidentes con los últimos episodios del terrorismo estatal. En ese contexto, el Proceso, la Dictadura, fue visto como una poderosa organización dedicada al mal: una imagen demoníaca, potente y perversa a la vez.

La acelerada retirada política de los militares abrió la puerta a la reaparición de los partidos políticos, y sobre todo, a la conformación de un vasto movimiento civil que demandaba elecciones democráticas. La alternativa a la dictadura sería la democracia; pero no la que la Argentina había conocido hasta entonces – la del yrigoyenismo y el peronismo; plebiscitaria, autoritaria, facciosa- sino la democracia republicana y liberal, sólidamente anclada en los derechos humanos. Esta democracia sería a la vez virtuosa y potente, y aseguraría a la sociedad la solución de todos sus problemas, y no solo los políticos. Así lo afirmó exitosamente el candidato Raúl Alfonsín, captando y construyendo ese estado de ánimo: “Con la democracia se come, se educa, se cura...”. Era la Panacea, es decir la imagen inversa de la Dictadura. Al demonizar aquella, en la misma medida se afirmaban los valores de la democracia.

La imagen precisa de la acción de la Dictadura se conformó a lo largo de 1984, con la investigación realizada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por figuras civiles relevantes y presidida por Ernesto Sabato. Su informe fue conocido como Nunca más, y consistió en la documentación de unos 9000 casos de desapariciones, y la demostración de que se había tratado de un plan sistemático de exterminio, y no meramente de “excesos”. Su edición circuló masivamente (y sigue circulando), y sirvió de base al Juicio y condena de los máximos responsables militares, realizada en 1985. Se ha señalado reiteradamente la excepcionalidad de una condena judicial en regla a responsables de una dictadura. Desde el punto de vista de la fundamentación del estado de derecho y del régimen político democrático, este fallo fue fundamental: no se trataba de la opinión de los vencedores, pues había hablado la Justicia. (puede agregarse que los jueces responsables no fueron designados ad hoc, sino que estaban ya en funciones antes de 1983, lo que en cierto sentido aumenta el valor de su fallo).

El informe, el proceso judicial (que incluyó a los principales jefes de las organizaciones guerrilleras: ERP y Montoneros) y el fallo configuraron una interpretación de lo ocurrido, popularizada como “teoría de los dos demonios”: la sociedad argentina había sido víctima inocente de dos demonios simétricos y antitéticos, los militares y los subversivos. De entrada, muchos militantes de la civilidad señalaron una limitación de esta manera de recordar las cosas: igualaba las responsabilidades de un grupo político y de quienes tenían la misión de custodiar el orden jurídico. El discurso derivado del Nunca más, sin embargo, salvó esta posible interpretación, señalando reiteradamente esa diferencia y

desigualdad de responsabilidades. Por ese motivo, y por otros, el juicio a los jefes militares fue mucho más espectacular que el que condenó, en ausencia, a los jefes guerrilleros.

Pero la interpretación de Nunca más, y de la teoría de los dos demonios, tiene otra singularidad, que me parece más trascendente: según esta versión, ambos demonios son en cierto modo ajenos a la sociedad. Según esta interpretación, ambos demonios, militares y subversivos, venidos desde sus márgenes, agredieron y oprimieron a una sociedad indefensa, donde todos fueron víctimas y donde todos rechazaron, desde siempre, los excesos de estas fuerzas ajenas. No era una interpretación fácil de aceptar, pues tergiversaba y olvidaba los comportamientos concretos y bien cercanos que la mayoría de los miembros de la sociedad tuvieron en esos años (incluido el no prestar demasiada atención al clamor de las organizaciones de derechos humanos). También, corría un telón sobre los acontecimientos anteriores a 1976, pródigos de violencia y de muertes, en los que el deslinde de responsabilidades era más difícil, inclusive el terrorismo de estado largamente practicado durante el gobierno peronista entre 1973 y 1976.

Nunca más fue –y diría que sigue siendo– el elemento central de la memoria de la Dictadura. En 1983, esa versión –que hablaba de sucesos tan cercanos, que la memoria se confundía con el tiempo presente– fue esencial para constituir el sujeto de la nueva democracia, la *civilidad*. No eran la totalidad de los ciudadanos, ni se identificaban plenamente con algún partido político. Con respecto a la cuestión crucial de los militares, vale la pena recordar que el partido político mayoritario –el Justicialista– estaba en 1983 dispuesto a convalidar la auto amnistía que ellos habían pretendido darse. La *civilidad* eran los que se movilizaban en actos y marchas por la democracia, la parte activa de la ciudadanía, galvanizada por la convicción de que tenían una misión histórica: defender los derechos humanos y construir un régimen institucional fundado en el principio del estado de derecho y la república.

La construcción de la *civilidad* requirió sobre todo acentuar la concordancia y complementar el pluralismo con espíritu de conciliación, mediante la supresión o postergación de las cuestiones que podían generar divisiones. Así, entre quienes se identificaban con la *civilidad* se evitó la discusión a fondo de las alternativas políticas a futuro, y también se evitó profundizar en cuestiones delicadas, como por ejemplo la Guerra de Malvinas (un tema en el que no estaba claro si los militares eran acusados de haber ido a la guerra o simplemente de haberla perdido). Tampoco se ahondó en lo que cada uno había hecho durante los años de la dictadura. Mucho menos, en lo que cada uno había hecho, en los diez años anteriores a 1976, para crear la situación que propiciara la intervención militar. La unidad de la *civilidad* fue el gran propósito.

Por otro lado, estaba la convicción de la *panacea*, de la acción milagrosa de la democracia. Se trataba ciertamente de una ilusión, algo boba, pero absolutamente

indispensable –me parece- para construir una democracia republicana que en 1983 no tenía ni tradiciones o rutinas arraigadas, ni dirigentes templados ni, siquiera, una ciudadanía formada y consciente. La ilusión debía cubrir todas esas carencias hasta que la democracia, echada a andar, generara sus propias condiciones.

Por entonces, los historiadores profesionales identificados con la civilidad se comportaron –nos comportamos- fundamentalmente como ciudadanos, confirmaron esta versión y se abstuvieron de plantear dudas. ¿Qué hubieran podido decir, siguiendo sus preferencias profesionales por el matiz y la relativización de las convicciones? Solo verdades que resultarían molestas y negativas para el propósito del momento. Quizá, que el Proceso demonizado no era un bloque monolítico, y que estuvo desde el principio atravesado por poderosas disensiones, facciosas y de objetivos. Que en la “sociedad” el mensaje represor de la Dictadura encontró una amplia recepción, debido a la tradición autoritaria y excluyente, que era un componente fuerte de la cultura política argentina.

Sobre todo, podrían haber planteado dudas acerca de la potencia de la democracia. Al fin, la democracia es un sistema para la selección de gobernantes, cuya herramienta para operar es el estado. La conjunción de dictadura corrupta y neoliberalismo de mercado había corroído profundamente la maquinaria estatal, de modo que poco se podía hacer con algo que se parecía más que a una ajustada herramienta, a un automóvil sin volante y sin freno. Finalmente, los historiadores podrían haber relativizado la capacidad de la sociedad argentina para generar ciudadanos –como lo había hecho a lo largo de buena parte del siglo XX- debido al empobrecimiento, la polarización y hasta la segmentación social, que la Dictadura había promovido y cuyos peores efectos todavía no habían acabado de manifestarse.

Pero cuestionar al sujeto y a su misión histórica –al fin, los elementos de una nueva versión teleológica- habría significado minar su confianza, y en las circunstancias de 1983, esto era una apuesta demasiado arriesgada. Los historiadores profesionales integrantes de la civilidad obraron, en la ocasión, como ciudadanos comprometidos.

Veinte años de democracia

Veamos ahora cómo se desarrollaron estas cuestiones a lo largo de más de veinte años de ejercicio de la democracia. Sobre ello quiero plantear dos problemas. El primero: cómo influyó esta memoria del Proceso, la del Nunca Más, en el decurso de veinte años de democracia. El segundo: cómo esos veinte años de democracia afectaron o modificaron la memoria construida de la Dictadura.

Mi hipótesis es que la memoria de la Dictadura, sintetizada en el Nunca Más, y su contraparte, la imagen de la democracia como panacea, conformaron un tipo de

ciudadanía, cuyas características incidieron en el desarrollo de la práctica democrática. Por supuesto que no es el único factor, y quizá ni siquiera el principal, pero ha sido importante. Cuatro rasgos la caracterizan: fue una ciudadanía crónicamente desilusionada, intermitente en su interés, más consciente de sus derechos que de sus deberes, y crecientemente intolerante.

En primer lugar, fue una ciudadanía crónicamente desilusionada. La realidad de la gestión democrática de un país empobrecido, y con el Estado en situación de licuación, estaba muy lejos de los prospectos y utopías de 1983. Tan grande había sido la ilusión, tanto más lo fue la desilusión democrática, que fue produciéndose por etapas, y afectando a porciones más grandes de la sociedad, a medida que los problemas heredados explotaban, como bombas de acción retardada.

En 1987 el gobierno democrático, pese a haber movilizadado a la ciudadanía hasta el punto de máxima tensión, no pudo doblegar el planteo corporativo de un conjunto reducido de oficiales y suboficiales del Ejército, los llamados "carapintadas", que se negaban a someterse a la Justicia. Ese fracaso desencadenó la desilusión de la parte más activa y politizada de la ciudadanía, que argumentó que eso no era lo que se le había prometido. La principal víctima de esa desilusión fue el presidente Alfonsín.

En 1989 la crisis económica y la primera hiperinflación condujo a la desilusión al conjunto de la sociedad, que constató que la democracia no aseguraba el pan, la educación ni la salud, y que más bien parecía agravar los problemas. En 2001 la crisis general produjo un descreimiento generalizado en la clase política, concretado en la famosa consigna "que se vayan todos". Fue el punto más bajo para el imaginario democrático.

En segundo lugar, fue una ciudadanía que controló de manera intermitente, que estuvo intermitentemente involucrada en las cuestiones públicas. Al principio siguió con atención la marcha del gobierno, pero a medida que perdía las ilusiones y se sucedían los problemas económicos, fue desentendiéndose; confió en las soluciones un poco mágicas que ofreció el presidente Carlos Menem en los años noventa, y dejó de controlar a sus representantes, los políticos, que perdido el fervor inicial, se convirtieron en una corporación corrupta, dedicada a exprimir al estado.

En tercer lugar, fue una ciudadanía mucho más consciente de sus derechos que de sus deberes. Una ciudadanía heredera de las organizaciones de derechos humanos, acostumbrada a pensar que el estado era un ente ajeno, que tenía una gran deuda con sus ciudadanos, y nada que reclamarles, y acostumbrada también a considerar que cualquier manifestación de autoridad estatal debía ser definida como autoritarismo.

Finalmente, el sector más consciente de la ciudadanía derivó hacia la intolerancia. La defensa de los derechos humanos derivó en su utilización facciosa por parte de quienes se autoproclamaron dueños de los valores éticos y con autoridad para

juzgar el comportamiento de los demás y someter a la vindicta pública a aquellos a quienes acusaba de enemigos de la democracia. La forma extrema de este proceder fueron los llamados “escraches”, demostraciones públicas de hostilidad contra personas, a menudo violentas, que se usaron ampliamente con fines a menudo alejados de los que originalmente los inspiraban.

Estos rasgos definen un tipo de ciudadanía y remiten, por diferentes caminos, a la imagen de la Dictadura acuñada por Nunca Más. La memoria, libre del control de una reconstrucción más rigurosa del pasado, incidió de ese modo en el proceso político y algunos tuvo efectos notorios: facilitó el accionar de una banda de políticos corruptos, posibilitó los avances del presidencialismo a costa de las instituciones republicanas, alimentó el clima faccioso.

El tema de los crímenes de la Dictadura siguió reapareciendo cíclicamente en la agenda pública, sobre todo cuando la Justicia, cuya marcha es intermitente y zigzagueante, lleva a los estrados a nuevos agentes de la represión, un proceso que se ha acelerado en los años de la presidencia de Kirchner. Desde fines de los noventa, nuevas imágenes del Proceso se constituyeron junto a la principal, desarrollando algunos aspectos de aquella y contradiciendo otros. La memoria de los ciudadanos justos, a los que recién hacía referencia, se fue transformando en una memoria rencorosa, preocupada por saldar cuentas pendientes del pasado. Aujtoproclamados Catones y Robespierres, muchos de los cuales ni siquiera estuvieron en la defensa de los Derechos Humanos en tiempos de la Dictadura, encontraron en esos juicios retrospectivos la forma de construirse un pasado de militante, como le ocurre, por ejemplo, al presidente Kirchner.

Gradualmente, fue reapareciendo una memoria militante. Los que en el Nunca más habían sido denominados “víctimas inocentes”, sin ninguna filiación ni práctica política, empezaron a ser reivindicados como luchadores sociales y políticos idealistas, como quienes habían dado su vida para una transformación revolucionaria de la sociedad. Por ese camino, comenzó también una reivindicación de la acción violenta, aquella que en 1983 había sido categóricamente condenada en nombre de los derechos humanos. En esta línea se inscribe la más conocida de las organizaciones defensoras de los derechos humanos: Madres de Plaza de Mayo, y su presidenta, Hebe de Bonafini.

Finalmente, ha terminado por tomar status público una memoria del Proceso ligada a los derrotados de 1983, los partidarios de la Dictadura. En este caso, no se reivindica el terrorismo, pero se recuerda el estado de anarquía violenta en que se encontraba el país en 1976, lo que es una forma indirecta de justificarlo. Pero además, hacen la cuenta de una lista, bastante nutrida, de víctimas de los guerrilleros, que equiparan a las víctimas del terrorismo estatal. Afirman, basándose en la doctrina de los derechos humanos, que toda vida humana debe ser respetada y que los muertos no tienen partido.

Estas tres memorias, más allá de lo que se opine acerca de los móviles de la construcción de estas imágenes, ponen en discusión temas que la memoria del Nunca más había ocluido y que ahora surgen. La reivindicación de las “víctimas de la subversión”, y la polémica que ha originado –el gobierno ha sancionado a los militares que participaron en actos conmemorativos- puede resolverse perfectamente en los términos planteados por la ciudadanía en 1983. Se planteó entonces la dimensión ética de la política, el valor absoluto de la vida humana y la imposible subordinación de los medios a los fines. Si se acepta esto, tal como se afirmó en 1983, las víctimas del terrorismo son, primero y antes que nada, víctimas, y sus victimarios son asesinos, más allá de sus creencias subjetivas acerca de la justicia de sus fines.

En las otras cuestiones, el debate ciudadano ganaría con la incorporación de nuevas perspectivas. La memoria rencorosa plantea la cuestión de la inocencia de la sociedad, con la sola excepción de los culpables, y la pregunta acerca de las responsabilidades individuales y de quienes han de ser sus jueces. La memoria de los militantes plantea el problema de la violencia, que los militares llevaron hasta el extremo horroroso pero que ciertamente no inventaron.

Los historiadores, veinte años después

Aquí es donde, veinte años después, los historiadores ciudadanos pueden, y deben, recuperar su voz de historiadores, si quieren ser eficaces como ciudadanos. Una cierta democracia real –no la ilusoria- está consolidada en la Argentina. Sobrevivió al cimbronazo de 2002 y hoy se asienta en rutinas que hacen prever la continuidad. También se sabe cuánto puede dar la democracia: ni mucho ni muy poco. Por otra parte, la sociedad no se divide hoy en dos bandos. Las cuestiones en debate son muchas, muy variadas, y alineadas en torno de distintos ejes, y un poco de claridad seguramente es bienvenido.

Un par de temas tienen que ver con el pasado, el que “duele”, y se proyectan sobre el presente y el futuro. Se trata de la violencia y de las responsabilidades personales. Ocluidos o parcialmente tratados por la memoria constituida, puestos en debate por las emergentes, requieren de la revisión que puede hacer el historiador, no solo por su interés profesional por conocer, sino para darle una renovada eficacia a su intervención ciudadana.

La memoria oficial del Nunca Más limitó el tema de la violencia a dos actores: las organizaciones guerrilleras y las fuerzas armadas. Por su parte, la memoria militante se concentró exclusivamente en el terrorismo de estado. Pero la violencia política, asociada con la eliminación física del adversario, estaba plenamente instalada en amplísimos sectores de la sociedad argentina desde la segunda mitad de los años sesenta. El asesinato no solo era considerado un medio legítimo, si el fin lo justificaba; también podía servir como instrumento aleccionador o disciplinador. Un dato de la cultura política de entonces es el extrañamiento que

muchos argentinos sienten hoy por su propia manera de pensar en los años sesenta y setenta, que hoy juzgan horrorosa.

A la vez, este extremo de violencia tiene claros precedentes en las décadas anteriores –por ejemplo, los fusilamientos de 1956 o los bombardeos de 1955. Inclusive si se consideran también los discursos justificadores o incitadores, esos que hacen que el asesinato sea considerado normal, las raíces llevan a muchos lados, desde el integrismo católico, con su dimensión sacrificial, a los imitadores del Ché Guevara, o a la tradición nacionalista, o hasta al propio discurso democrático, que en la Argentina previa a 1955 fue significativamente faccioso y violento. Entender la violencia que acompañó a la última dictadura, y también neutralizar su eventual reaparición, exige esa mirada amplia, que se pregunte no solo por sus actores directos sino por el público, la famosa sociedad que fue una víctima inocente, pero que en realidad, en buena medida admiró, aplaudió o al menos toleró como algo natural el uso del asesinato como instrumento político.

Con respecto a las responsabilidades durante la dictadura, se trata de un problema más amplio que la estricta responsabilidad judicial. La mirada de los historiadores está ya desnudando las limitaciones del cuadro idílico del Nunca Más. No hubo multitudes que aclamaran a los jefes militares, pero tampoco hubo un repudio masivo, y no solo por miedo. La propuesta autoritaria y represiva tenía anclajes y elementos de reconocimiento en la cultura política, y la dictadura pudo construir sobre ellos una victoria discursiva consistente.

Pero el punto principal para el historiador es otro, y está avalado por infinidad de estudios acerca de la vida y supervivencia en regímenes totalitarios o terroristas. En esos contextos, la gente no se divide entre quienes aceptan y quienes se oponen: el blanco y el negro que exigen los juicios morales. Vivir en dictadura significa conceder algo y defender otras cosas. Consiste quizás en aceptar el discurso del poder y contestarlo allí donde ofrece una brecha. Tal fue el caso de Madres de Plaza de Mayo, que se hizo fuerte en uno de los valores que la Dictadura no podía contestar: el derecho de la madre sobre su hijo. Vivir en dictadura consiste en elegir los ámbitos donde la resistencia puede tener alguna trascendencia, y abandonar otros. Consiste por ejemplo en utilizar la diversidad del estado, la pluralidad de agencias estatales, la vigencia, aunque sea formal, de valores institucionales, para sobrevivir y combatir. Son, según la célebre frase de Michel de Certeau, las tácticas del débil, frente a las estrategias del fuerte.

El análisis detallado, día a día, de conductas y actitudes durante la Dictadura, puede arrojar, prima facie, un resultado desalentador: desde un punto de vista extremo, todos pueden ser considerados cómplices, aunque solo sea por haber sobrevivido. Pero la lección que extrae el historiador es otra: las conductas son grises, ni blancas ni negras, y lo que importa es explicar el matiz. Llegado a ese punto, la pasión por juzgar se atempera y se desarrolla el ansia por entender. Al

fin, esa fue la regla de oro que planteó Marc Bloch, un historiador que, a fuer de ciudadano, se enroló en la resistencia francesa y murió fusilado por los nazis.

Estas salvedades sobre la violencia y la responsabilidad, si fueran incorporadas en el debate público y se tradujeran en una memoria del Proceso más matizada, sin duda contribuirían a asentar uno de los pilares de la democracia republicana que decimos –o decíamos- querer construir: el pluralismo consiste en aceptar que la sociedad es plural, y que ninguna de sus partes tiene el monopolio de la verdad y del bien o, para decirlo con la frase bíblica, que nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. Ayudaría a limitar la intolerancia, a achicar el terreno de la facciosidad, y también acostumaría a mirar los problemas del pasado, y los del presente, de una manera menos esquemática y más comprensiva. Si la intervención de los historiadores en los combates por la memoria lograra eso, no sería poca cosa.